



Magdalena Valerio, Alfredo Pérez Rubalcaba y José María Barreda.

El Gobierno central puso como ejemplo la aplicación de las políticas sociales del Gobierno de Castilla-La Mancha. En un acto organizado por la Secretaría Federal de Ciudades y Política Municipal del Psoe en Guadalajara, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior, **Alfredo Pérez Rubalcaba**, defendió la gestión del presidente regional, **José María Barreda**, al manifestar que éste es la mejor opción para los castellano-manchegos. En las elecciones autonómicas, “los ciudadanos deberán elegir a la persona que mejor defienda sus derechos

como ciudadanos”, señaló.

“¿Quién atenderá mejor las escuelas públicas, Barreda o Cospedal?, ¿quién cuidará más la sanidad?, ¿quién defenderá mejor la Ley de Dependencia?”, se preguntó Rubalcaba. “Comparar a Cospedal con Barreda es un chollo, porque, en unas elecciones, la salida puede ser por la izquierda o por la derecha, y la solidaria es la nuestra”, añadió.

“A pesar de los momentos de dificultad, los socialistas saldrán adelante en unas elecciones que los populares sólo ganarán si desistimos; si no lo hacemos, como estamos cargados de

razón, volveremos a ganar, y así será en Castilla-La Mancha”, manifestó.

■ Reformas

Alfredo Pérez Rubalcaba aprovechó su intervención para explicar las reformas que está llevando a cabo el Gobierno de España, y recordó que el acelerón que está propinando a las políticas financieras, especialmente en lo relacionado a las cajas, “tiene como objetivo lograr que estas entidades presten dinero para crear riqueza y empleo”. Respecto a la reforma del sistema de pensiones, seña-

El Gobierno central pone de ejemplo a la región en las políticas sociales

Barreda señaló que no retrocederá “ni un milímetro” en el Estado del Bienestar

lo que servirá “para que uno sepa que, cuando se jubile, va a tener una pensión segura, como las que se tienen ahora”.

Por su parte, José María Barreda instó a los ciudadanos a tener en cuenta que el Estado del Bienestar en la región, “con uno de los mejores sistemas sanitarios públicos, un gran sistema educativo y una completa red de prestaciones sociales, ni siempre han sido como ahora ni tienen por qué seguir siendo así”. Todo depende, según el presidente regional, de la voluntad política del Gobierno de turno, de la concepción que tenga de la vida y de su interés por privatizar o no los servicios esenciales. “Nosotros pensamos que

no hay que retroceder ni un solo milímetro, porque eso sería retroceder en la igualdad entre los hombres”, aseveró Barreda, que reiteró que es precisamente lo público lo que empuja al Gobierno que preside. “Es por esto por lo que merece la pena hacer un esfuerzo por la igualdad, porque es en beneficio del interés general trabajar para que la vida trate con dignidad a todas las personas”, añadió.

Para Barreda, la actitud del Partido Popular de negarse a todo no es responsable; “lamentablemente, tenemos una oposición que, incluso antes de saber de lo que se está hablando, ya se está oponiendo”, opinó el presidente.

La Junta irá a los tribunales si el Gobierno no modifica el sistema de financiación

El Estado debe a Castilla-La Mancha 200 millones de euros por la aplicación de la Ley de Dependencia

El Gobierno de Castilla-La Mancha no descarta acudir a los tribunales si el Gobierno de España no modifica la aplicación del sistema de financiación autonómica para la región.

La vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, **María Luisa Araújo**, explicó que la Junta ha elevado una petición al Ministerio de Economía y Hacienda para que revise el pacto sobre la financiación autonómica “con el fin de mejorar la financiación relacionada, sobre todo, con la Ley de Dependencia y la

sanidad”. Araújo añadió que están a la espera de una respuesta, e indicó que, si no les satisface, acudirán a la vía judicial, como ya ha hecho la Junta en otras ocasiones, según recordó, tanto con gobiernos del Pp como del Psoe.

“No estamos de acuerdo en cómo se está interpretando la aplicación de los dos fondos”, señaló, y exigió financiación para aquellas decisiones que “impone el Gobierno de España” y que, según indicó, la Junta pone en marcha “con mucho gusto, y lo hace bien,

sobre todo porque van destinadas a los colectivos que más lo necesitan”.

Sobre la Ley de Dependencia, explicó que su “correcta aplicación implica un déficit que equivale a un punto del PIB regional, mientras que la financiación del Gobierno no llega ni a una tercera parte del gasto que eso implica”.

El día de antes, el consejero de Salud y Bienestar Social, **Fernando Lamata**, cifró en 200 millones de euros la cantidad que debe el Gobierno central al de Castilla-La Mancha por la apli-



María Luisa Araújo.

cación de la Ley de Dependencia.

■ Lealtad institucional

“Estamos teniendo una actitud muy exigente porque entendemos que el principio de lealtad institu-

cional, recogido expresamente en ese modelo de financiación, exige que cuando el Estado adopte decisiones que impliquen gasto para las comunidades autónomas garantice, de manera paralela, que la financiación sea suficiente”, manifestó la vicepresidenta.